



Bogotá, D.C., - 1 FEB. 2012

**DIRECTIVA PERMANENTE**

000001

No. \_\_\_\_\_/

**CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES  
IMPARTIDAS POR LA PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACIÓN**

**I. OBJETO Y ALCANCE**

**A. FINALIDAD**

Impartir instrucciones para atender las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación, mediante la Directiva No. 17 del 15 de diciembre de 2011, de la citada entidad.

**B. REFERENCIAS**

1. Constitución Política de Colombia.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado mediante la Ley 74 de 1968 artículos 2, 3 y 5.
3. Ley 65 de 1993, "Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario"
4. Decreto 262 de 2000 "Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos."
5. Resolución 815 de 2006 del Ministerio del Interior y de Justicia "Por medio de la cual se incorporan programas de derechos humanos en el marco de la política penitenciaria y carcelaria"
6. Documento Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES 3277 de 2004 "Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios"
7. CONPES 3412 de 2006 "Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios" – Continuación del CONPES 3277
8. CONPES 3575 de 2009, "Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios – seguimiento a los CONPES 3277 de 2004 y 3412 de 2006",



9. Sentencia T-153 de 1998, Expedientes acumulados T-137.001 y 143.950, Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Tema: Estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del País.
10. Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación N° 181 de 2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
11. Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación Técnica No 0020 de 2011 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. (Capitán Carolina esto es muy importante dejarlo porque es lo referente a ocupación de internos)
12. Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación N° 090 de 2011, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y COLDEPORTES.
13. Resolución No. 7302 de 2005 “Por medio de la cual se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario”
14. Resolución No. 2392 de 2006, “Por medio de la cual se reglamentan las actividades validas de redención de pena”
15. Resolución No. 2521 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba la metodología P.A.S.O”
16. Directiva Permanente No. 002 de 2011 “Criterios de coordinación y asesoría para los Establecimientos de la Fuerza Pública”
17. Directiva Permanente No. 007 de 2011, “Seguimiento a los contratos de prestación de servicios de salud intramural y aseguramiento”
18. Directiva Permanente No. 010 de 2011 “Respeto a las personas LGBTI en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”
19. Directiva Permanente No. 011 de 2011, “Parámetros de Tratamiento Población Justicia y Paz”
20. Directiva Permanente No. 012 de 2011 “Política Institucional de respeto, promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos”
21. Directiva Permanente No. 016 de 2011: “Parámetros de atención a la población reclusa con patologías mentales.”
22. Directiva Permanente No. 019 de 2011 “Evaluación y certificación de la calidad de la operación estadística Penitenciaria y Carcelaria”
23. Directiva Permanente No. 021 de 2011: “Supervisión de los contratos suscritos por la Subdirección de Reinserción Social”
24. Directiva Permanente No. 023 de 2011, “Criterios para la ubicación de internos en las unidades de tratamiento especial – UTE-“



25. Directiva Transitoria No. 033 de 2011 "Clasificación de internos por regionales"
26. Directiva Transitoria No. 034 de 2011 "Ejecución convenio interadministrativo SENA -INPEC No. 00020 de 2011"
27. Directiva Transitoria No. 039 de 2011 "Ejecución Convenio marco de cooperación No. 090 de 2011 Coldeportes – INPEC"
28. Directiva Transitoria No. 054 de 2011: "Parámetros para la asignación de cupos y pago de Bonificación por trabajo y servicios de Internos, modalidad de administración directa"
29. Circular No. 63 de 2011 "Lineamientos generales para la supervisión de los contratos de alimentos.
30. Circular 093 de 2011, " Declaración de Exequibiliad de la norma que regula las visitas mensuales del Ministerio Público a los establecimientos de reclusión"
31. Circular 087 de 2011, " Acatamiento Sentencia T-319- 2011, Corte Constitucional. "Garantía a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad ante la presencia de hijos menores de edad. Reiteración de jurisprudencia..."

### C. VIGENCIA

A partir de la fecha de expedición y en forma permanente.

## II. INFORMACIÓN

El Ministerio público fue creado en Colombia desde 1830, como encargado de la representación de la sociedad para la protección de sus intereses, la guarda y promoción de los derechos humanos y el ejercicio pulcro de la función pública para imponer, si es del caso, sanciones disciplinarias a quienes incumplan con sus funciones.

Según el Doctor Jacobo Pérez Escobar, *"La Procuraduría es el conjunto de funcionarios que tiene por misión la defensa de los intereses de la nación y de la sociedad, promoviendo la ejecución de las leyes y demás normar jurídicas y de las sentencias judiciales"*.

En la sentencia C-417 de 1993, del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, se lee: *"La Procuraduría General de la Nación es el organismo que goza, por mandato constitucional, de una clausula general de competencia para conocer de las faltas disciplinarias de los empleados, en ejercicio de un poder que prevalece sobre el de otros órganos estatales"*.

Así las cosas, la Constitución Política de Colombia en su artículo 277 establece que el Procurador General de la Nación tiene como funciones, vigilar el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, así mismo el proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.



En el marco del Decreto 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, se confieren facultades al Procurador General de la Nación, para que entre otros:

- Formular la política general y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
- Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.
- Expedir, como supremo director del Ministerio Público, las directivas y circulares que resulten conducentes para el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 017 "Directrices para la protección de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad" del 15 de diciembre de 2011, mediante la cual se deben disponer una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad, atención básica y resocialización de la población reclusa.

En consecuencia y con base en las instrucciones impartidas por el Director General, se dispuso la conformación de unas mesas de trabajo lideradas por la Subdirección de Reinserción Social, realizadas los días 17, 24 y 30 de Enero del año en curso, en la sede central del Instituto, con el fin de tratar cada uno de los temas referidos por la instancia de control y formular el plan de trabajo, que se desarrolla en la presente directiva.

### III. EJECUCIÓN

#### A. MISIÓN GENERAL

Garantizar la implementación de acciones que permitan atender las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación.

#### B. MISIONES PARTICULARES

##### 1. DIRECCIÓN TÉCNICA

- 1.1. Supervisa el cumplimiento de la presente Directiva, procurando la sinergia institucional.
- 1.2. Efectúa seguimiento al cumplimiento de la Directiva Permanente No. 002 de 2011 "Criterios de coordinación y asesoría para los Establecimientos de la Fuerza Pública"

##### 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- 2.1. Socializa a las dependencias a su cargo el contenido de la presente directiva, con los respectivos anexos.



- 2.2. Gestiona ante las entidades competentes la asignación de recursos técnicos, humanos, capacitación, entre otros, para atender las recomendaciones de la Procuraduría y los programas de resocialización y atención básica.
- 2.3. Prevé los recursos necesarios para apoyar a la Subdirección de Reinserción Social, de acuerdo con el plan de necesidades que presente la citada dependencia.

### 3. SUBDIRECCION DE REINSERCIÓN SOCIAL

- 3.1. Supervisa la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Intramural.
- 3.2. Imparte instrucción a las Regionales para la implementación de acciones que permitan optimizar el servicio de salud prestado a la población reclusa intramural.
- 3.3. Realiza reuniones de coordinación con CAPRECOM con el objetivo de exponer las novedades presentadas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 3.4. Elabora un diagnostico de las áreas de sanidad en los Establecimientos de Reclusión.
- 3.5. Presenta la Dirección Administrativa y Financiera el plan de necesidades para la adecuación de las áreas de sanidad de los Establecimientos de Reclusión que lo requieran.
- 3.6. Presenta ante la Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera el plan de necesidades para atender las recomendaciones de la Procuraduría y el cumplimiento de su misión.
- 3.7. Consolida la información suministrada por CAPRECOM sobre la situación epidemiológica e índices de morbilidad de la población reclusa.
- 3.8. Realiza seguimiento a la ejecución de los planes y programas de estudio y trabajo que se desarrollan en los Establecimientos de Reclusión y consolidan la información nacional.
- 3.9. Presenta para aprobación de la Dirección General, los proyectos de implementación de programas de trabajo, que permitan incrementar los cupos en los ERON.
- 3.10. Gestiona convenios de cooperación con la empresa privada y el sector público que permita ampliar la oferta de estudio y trabajo en los Establecimientos.
- 3.11. Programa la realización de ferias empresariales e invita a la empresa privada a vincularse en los Establecimientos, empleando la mano de obra de los internos, en las diferentes actividades ocupacionales.



- 3.12. Gestiona la vinculación de la empresa privada, a los programas de tratamiento y atención básica de la población reclusa.
- 3.13. Lidera los programas de recreación, cultura y deporte a desarrollarse en los ERON.

#### **4. SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES**

- 4.1. Socializa y verifica el cumplimiento de la Directiva Permanente No. 019 de 2011 "Evaluación y certificación de la calidad de la operación estadística Penitenciaria y Carcelaria"
- 4.2. Proporciona soporte técnico y asesoría para el registro de la información al aplicativo SISIPEC
- 4.3. Desarrolla auditorias con el objetivo de verificar la calidad de la información registrada en el aplicativo SISIPEC.

#### **5. SUBDIRECCIÓN ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL**

Diseña un plan de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y resocialización dirigidos a todos los servidores del INPEC, con el apoyo del Grupo de Derechos Humanos y la Subdirección de Reinserción Social.

#### **6. OFICINA ASESORA JURIDICA**

Imparte directrices a los Establecimientos de Reclusión para actualizar los Reglamentos de Régimen Interno de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente.

#### **7. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Presenta las necesidades en materia de recursos para el cumplimiento de la misión institucional a través del anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, -Dirección General de presupuesto público nacional.

#### **8. SUBDIRECTORES OPERATIVOS REGIONALES**

- 8.1. Socializan a los Establecimientos de Reclusión de su jurisdicción el contenido de la presente directiva, con los respectivos anexo.
- 8.2. Presentan a la Subdirección de Reinserción Social, proyectos de planes de trabajo y estudio que permitan incrementar los cupos en los ERON de su jurisdicción.
- 8.3. Observan estricto cumplimiento a la Directiva Permanente No. 002 de 2011 "Criterios de coordinación y asesoría para los Establecimientos de la Fuerza Pública" ✓



- 8.4. Realizan seguimiento y verificación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva, procedimientos, pautas y lineamientos emitidos por la Dirección General.
- 8.5. Remiten a la Dirección Técnica, un informe trimestral de las acciones desarrolladas en cumplimiento de la presente directiva, en los Establecimientos de su jurisdicción.

## 9. DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN

- 9.1. Supervisan el cumplimiento de los Contratos de prestación de servicios de salud intramural y de aseguramiento actualmente con CAPRECOM para la población interna a cargo de su Establecimiento.
- 9.2. Realizan la inscripción en el SISIPPEC, de los internos que ingresen al Establecimiento de Reclusión, con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud.
- 9.3. Verifican que CAPRECOM garantice el acceso a los servicios de salud de la población que se encuentre en los Establecimientos de Reclusión, realizando el seguimiento diario al cumplimiento de los modelos de atención establecidos.
- 9.4. Informan a la Subdirección de Reinserción Social, las novedades identificadas en la prestación de servicios de salud.
- 9.5. Verifican la oportuna respuesta a los requerimientos, derechos de petición que realice la población interna respecto a la prestación de los servicios de salud, situación jurídica, seguridad, entre otros.
- 9.6. Verifican las condiciones y estado en que se entrega a la EPSS las áreas de sanidad, los equipos biomédicos y mobiliarios, el pago oportuno al personal contratado por CAPRECOM, el manejo de Historias Clínicas, y la disposición de Residuos Biológicos.
- 9.7. Imparten instrucción al Cuerpo de Custodia y Vigilancia para garantizar la accesibilidad de los internos a las áreas de sanidad, con el fin de dar cumplimiento a las citas programadas.
- 9.8. Coordinan con el Comandante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, el responsable de CAPRECOM y del Área de Sanidad del Establecimiento, cumplimiento a las citas con especialistas en la red externa, con el fin de optimizar recursos y garantizar la atención a los internos.
- 9.9. Supervisan el cumplimiento de los Contratos de Prestación de Servicios de Alimentación de acuerdo con los lineamientos impartidos en la Circular No. 063 de 2011.
- 9.10. Supervisan la operacionalización del Consejo de Interventoría y Seguimiento de Alimentación –CISA, en la auditoria al contrato de alimentación para la población reclusa.
- 9.11. Disponen la actualización de los Reglamentos de Régimen Interno, atendiendo las condiciones del establecimiento de reclusión y la normativa vigente en el marco del respeto, promoción, protección y defensa de los,




Derechos Humanos y las garantías constitucionales de los privados de libertad.

9.12. Verifican el registro oportuno de la información que reposa en las cartillas biográficas y hojas de vida de los internos, en el aplicativo SISIEPEC.

9.13. Realizan las gestiones pertinentes con las entidades territoriales con el fin de subsanar las dificultades identificadas a nivel local.

#### IV. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- A. De la socialización de la presente Directiva y gestiones adelantadas se deben elaborar las correspondientes actas y registros.
- B. Los Jefes de dependencia deberán remitir las actas de socialización de la presente directiva a la Dirección Técnica, con Plazo: **15 de marzo de 2012.**
- C. Es fundamental la coordinación armónica con las autoridades judiciales, los entes de control y autoridades del orden local y regional, con el fin de garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales de los privados de libertad.

  
Brigadier General **GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA**  
Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

#### DISTRIBUCIÓN

##### Para conocimiento

Grupo Asuntos Penitenciarios

##### Para cumplimiento

Dirección Técnica  
Dirección Administrativa y Financiera  
Subdirección de Reinserción Social  
Subdirección de Tecnología y Comunicaciones  
Subdirección Escuela Penitenciaria Nacional  
Oficina Asesora Jurídica  
Grupo Derechos Humanos  
Regionales  
ERON País

REVISÓ,

  
Coronel (r) **GLORIA NIÑO CARLOS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por: Tc. Potopy Arubal Pinzón – Director Técnico  
Roselin Martínez-Subdirectora Reinserción Social

Elaborado por: Ct (r) Carolina Parra M/ Ivonne Lagos/Miriam Silva  
Archivo: Mis documentos/Directivas

Calle 26 No. 27 – 48 Conmutador 2347474  
www.inpec.gov.co, E-mail: planeación@inpec.gov.co







ANEXO No. 01 DIRECTIVA PERMANENTE NO. 000001 DEL 11 FEB. 2012  
CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACIÓN



## PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

### GRUPO ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

#### ACCIÓN PREVENTIVA

#### SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE RESOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

##### Objetivo

Dar cumplimiento a las funciones preventivas consagradas en la Constitución Política, el Decreto-Ley 262 del 2000, y resolución No. 017 de 2000, el Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, creado para realizar, verificar y hacer seguimiento a las políticas públicas de resocialización (reinserción) en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

##### Estrategia de Prevención:

Esta actividad preventiva se realizará por parte de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, a través del Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, quienes contarán con la colaboración de funcionarios de las Procuradurías Regionales, Provinciales y Procuradores Judiciales I y II en lo Penal, atendiendo la Directiva 001 del 1 de abril de 2009 expedida por el señor Procurador General de la Nación.

Para lograr el objetivo propuesto, se buscará con el Congreso de la República, los Ministerios del Interior, de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, la aprobación de recursos necesarios para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pueda cumplir con las funciones asignadas en la ley, entre las cuales, se encuentra el programa de resocialización.



La Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) en los artículos 9, 10, 79, 94, 142 y 143, consagra la resocialización de los reclusos condenados como un fin fundamental de la pena, lo cual se logra con tratamiento penitenciario mediante el examen de su personalidad y a través del trabajo, educación, actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia.

De conformidad con el artículo 19 de la Resolución 490 de 2008, se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación de la población privada de la libertad, en el que se estableció que si bien es cierto existe la normatividad que regula el tema de la resocialización en los establecimientos carcelarios, la misma no se está implementando en debida forma por parte de la autoridad encargada de ésta función encomendada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Al respecto, se examinó la aplicación de las políticas de resocialización, en los programas relacionados con el trabajo, la educación, actividades recreativas, deportivas, culturales y las relaciones de familia, así como la infraestructura física para el cumplimiento de las referidas políticas, en los diferentes establecimientos de reclusión buscando impactar la política pública del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en este tema.

Es así como siguiendo las reglas mínimas dadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, se establece que el tratamiento de los condenados a una pena privativa de la libertad debe tener como objeto: "inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear la aptitud para hacerlo" <sup>1</sup>, y en Colombia, de conformidad con el Código Penitenciario y Carcelario, la pena privativa de la libertad está orientada hacia la resocialización, lo cual quiere decir que el tratamiento dado a los internos se fundamenta en el respeto de los derechos humanos y pretende propiciar influencias positivas para modificar su conducta delictiva de una manera progresiva hasta lograr su retorno a la sociedad.

No obstante, este sistema se ha venido cuestionando en varios lugares por la contradicción que se genera al pretender resocializar a un individuo en la cárcel, aislado del entorno social en el que cotidianamente se desenvolvería, por tanto, este enfoque pretende una mayor apertura del tratamiento hacia la vida social extramuros.

Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones ofrecidas por el sistema carcelario colombiano, el tratamiento podría orientarse hacia otras metodologías más prácticas que incluyan de todos modos los elementos esenciales dados por las reglas mínimas aprobadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, entre las cuales se destacan la necesidad de brindar un trabajo productivo a los internos durante su tiempo de permanencia en prisión, determinar un periodo para el retorno progresivo del condenado a la sociedad, y la necesidad de ofrecer programas de apoyo pos penitenciario.

De este modo, el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), en el artículo 4º,

<sup>1</sup> Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En <http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm>



estableció la reinserción social como una de las funciones de la pena. Es por esto, que el tratamiento penitenciario estará encaminado hacia la recuperación social del delincuente, mediante el desarrollo de programas que le permitan obtener conocimientos, valores, principios y habilidades laborales para desenvolverse en la sociedad, una vez recobre la libertad, como una persona útil y de esta manera evitar su reincidencia o reingreso.

### **Planteamiento de la Política de Resocialización**

El fin principal de la política penitenciaria y carcelaria es llevar a cabo procesos exitosos de resocialización. Al respecto, la Corte Constitucional define la resocialización como un "proceso continuo, coordinado, voluntario y personalizado que tiende a obtener la rehabilitación de la persona privada de la libertad en sus aspectos psíquico, educacional, social, profesional y económico", enmarcado en el respeto de los derechos humanos. Así, la política penitenciaria con fines resocializadores adquiere un carácter constitucional, no sólo desde el punto de vista de la dignidad humana (art. 10 de la Constitución Política de Colombia), sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y cumplimiento de los derechos fundamentales.

En relación con lo antedicho, el anterior Código Penal Colombiano establecía, en su artículo 12, al igual que el artículo 4 de la ley 599 de 2000, que la pena privativa de la libertad tiene tres fines fundamentales:

El Preventivo, en el sentido de que al existir la sanción a determinado delito, se desestimula a los individuos a cometer infracciones contra la ley;

El Retributivo, cuando se impone como una compensación o pago a la sociedad por un hecho delictivo y

El Resocializador, al entenderse la pena como un periodo durante el cual se busca estimular y reeducar al individuo para que se reincorpore a la sociedad y deje de ser una amenaza potencial para la misma.

### **Lineamientos de la Normas Internacionales y Nacionales, así como de la doctrina que se dedica al Derecho Internacional Humanitario**

La Doctrina del Derecho Internacional Humanitario — DIH- establece que el objeto y fin de los tratados modernos sobre derechos humanos es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, aplicable a las personas privadas de la libertad, independientemente de su nacionalidad, y que la obligación que le impone estas normas a los Estados no se limita al deber de respetar los derechos humanos sino que incluye el deber de garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción.

Además, en Colombia las normas de rango constitucional son supra legales y por ende, obligatorias. El artículo 1º de la Constitución señala que el Estado Colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana; y de la misma manera, el Código Penal (Ley 599 de 2000) en el artículo 1º fundamenta el Derecho Penal en el respeto a la dignidad humana.

Lo anterior se encuentra igualmente contemplado en el Código penitenciario y Carcelario, expedido mediante Ley 65 de 1993.



Al respecto, el Código Penitenciario y Carcelario reitera los principios de legalidad e igualdad como rectores de la política penitenciaria. En el artículo 9 reitera que la pena tiene función protectora y preventiva, e insiste en que su fin fundamental, al igual que el del tratamiento penitenciario, es la resocialización del infractor de la ley penal. Esta última se plantea como un proceso que se inicia con el examen de la personalidad del infractor y se logra a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario (art. 10), siguiendo un "sistema progresivo" (Art 12).

Asimismo, el Código también establece la necesidad de separar los reclusos atendiendo a categorías tales como sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes, y/o condiciones de salud y separa los sindicados de los condenados, según la fase de su tratamiento. Del mismo modo, de acuerdo con el Código, el estudio y el trabajo les permiten a los condenados redimir parte de la pena e igualmente establece la necesidad de ofrecer el servicio de sanidad y asistencia médica en cada establecimiento penitenciario.

En consonancia con lo anterior, el artículo 160 de la Ley 65 de 1993 contempla también la posibilidad de organizar las casas del pos penado, las cuales buscarán la integración de quien recobra la libertad a la familia y a la sociedad.

#### **Plan de actividades:**

La acción preventiva se inició el 22 de febrero de 2010 y se procedió a informar del Proyecto a los Ministerios del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, al Congreso de la República y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Del mismo modo, se les comunicó a los directores de los centros de reclusión de los departamentos de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca que había sido escogido para practicar las visitas administrativas relacionadas con las falencias de los programas de reinserción social a manera de muestra significativa para el posterior análisis.

Como resultado final de lo anterior, se entregaría un informe en marzo de 2011.

#### **Actividades desarrolladas**

Se comunicó a las autoridades competentes el inicio del proyecto "Seguimiento a la Política Pública de Resocialización en los Centros Carcelarios del País", a los Ministerios del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, al Congreso de la República, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a los directores de los establecimientos de reclusión de los departamentos de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, así como a las personas privadas de la libertad (condenados).

Se recibió respuesta del Director General del Presupuesto Público Nacional, y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien manifestó que estaría atento a brindar toda la colaboración que se requiera y además suministraría lo pertinente dentro de la órbita de sus competencias.

El Viceministro de Justicia y del Derecho, del Ministerio del Interior y de Justicia, según oficio del 01 de marzo del 2010, informó que ese despacho reitera la plena disposición del Ministerio para brindar toda la colaboración que requiriera para el



cabal desarrollo de las actividades previstas y para el cumplimiento de los objetivos propuestos. En ese sentido designó al Director de Política Criminal y Penitenciaria para que atienda los requerimientos emanados por este despacho.

La Secretaria Privada del Senado de la República, mediante oficio del 1° de marzo del 2010, informó que tomó atenta nota, para lo cual manifestó que estará pendiente del recibo de la copia de los resultados para el trámite pertinente ante esa Corporación.

El Subdirector Operativo, Regional Central, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, mediante oficio del 8 de abril de 2010, manifestó que con el memorando No. 100-DRCENTYD-2397 dirigido a los centros carcelarios de Cáqueza, Chocontá, Facatativá, Fusagasugá, Gacheta, Girardot, La Mesa, Ubaté, Villeta y Zipaquirá, se informó de las visitas que el Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios de la Procuraduría realizaría a esos establecimientos carcelarios; por lo tanto, les sugirió brindar toda la colaboración requerida.

### Reuniones

El día 26 de marzo de 2010 se llevó a cabo una reunión con el doctor Alejandro Gómez Martínez, Subdirector Técnico de Reinserción Social del INPEC, quien manifestó que, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 270 del 29 de enero de 2010<sup>2</sup>, tiene dentro de sus funciones, el diagnóstico, diseño, elaboración, definición, aplicación y vigilancia de los **"proyectos y programas de atención básica de la población reclusa y tratamiento penitenciario de la población condenada que permita la integración social positiva"**, así como ejecutar el presupuesto aprobado y gestionar y asignar recursos, en coordinación con la Subdirección Financiera, para la implementación y ejecución de proyectos y programas a su cargo.

En desarrollo de esta reunión, el Dr. Gómez Martínez reconoció que en el INPEC "existen debilidades estructurales que afectan el tratamiento penitenciario y la reinserción social de la población condenada, como la deficiente infraestructura física, la ausencia de espacios adecuados para el desarrollo de los programas (aulas, talleres, espacios de trabajo) y el déficit de recursos y talento humano y su movilidad".

Asimismo, indicó que "en materia de recursos humanos hoy se está atendiendo a la población reclusa que llega a los 78.000 reclusos con la misma planta de personal del año 1994, cuando había tan sólo 40.000 internos en las cárceles, y que, además, existe mucha movilidad en el personal encargado del desarrollo y ejecución de los planes y programas de reinserción social", por ser cargos de libre nombramiento y remoción", lo cual, impide que los programas y proyectos presentados se realicen por la falta de continuidad de los servidores.

En ese orden de ideas, indicó también que la situación de hacinamiento existente en los establecimientos de reclusión es crítica, razón por la cual se le debe dar prioridad a su solución, ya que esta condición se traduce en rencillas entre los internos, generando la necesidad de permanentes traslados a otros patios, evidenciando así problemas de convivencia.

Así las cosas, lo primero que se debe tener en cuenta para dar inicio a la resocialización es la personalidad y las demás condiciones del entorno de cada interno, lo que se logra mediante una evaluación y estudio individual de cada recluso, por medio de un grupo interdisciplinario de profesionales, para determinar el perfil y



ubicarlo en un grupo de trabajo donde desarrolle a gusto sus habilidades.

Planteó, además, que la entidad pretende trabajar con realidades, caracterizando las necesidades de ocupación, mediante el diseño de una estrategia de planes comunes, que diseñe y establezca instrumentos de medición, y asimismo aseguró que la subdirección a su cargo está trabajando en el diseño e implementación de un plan estratégico a 20 años, que evite la improvisación y la inmediatez e incluya la capacitación laboral y formación para el emprendimiento, que contenga programas para trabajar en todas las áreas mediante convenios con Universidades, entre las que se encuentran inicialmente la de Caldas y Quindío.

Al respecto, vale la pena destacar la mencionada gestión realizada por el INPEC para la firma de convenios con diferentes Universidades, con el fin de apoyar y fortalecer los programas y actividades de atención y tratamientos a la población interna, mediante la realización de pasantías, así como para brindarles la posibilidad a los reclusos de participar en programas de educación superior a distancia, con lo cual, se logró incrementar la participación de los internos en los mismos, pasando del 0,3% en 2006 al 2,3% en 2009.

Relación del Muestreo realizado

VISITAS PRACTICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE BOGOTÁ		
Nº	FECHA	EPC
1	22 de junio /10	Reclusión de Mujeres "El Buen Pastor, Bogotá
2	06 de julio /10	ECP La Picota, Bogotá
3	24 de julio/10	EC " La Modelo", Bogotá

VISITAS PRACTICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE CUNDINAMARCA		
Nº	FECHA	EPC
1	09 de julio /10	EPC La Mesa, Cundinamarca
2	19 de julio /10	EPC de Fusagasugá, Cundinamarca
3	22 y 23 julio /10	EPC "El Diamante" Girardot, Cundinamarca
4	29 de julio/10	EPC de Ubaté, Cundinamarca
5	30 de julio/10	EPC de Zipaquirá, Cundinamarca
6	20 de sep/10	EPC de Cáqueza, Cundinamarca
7	17 de sep/10	EPC de Villeta, Cundinamarca
8	22 de octubre/10	EPC de Chocontá, Cundinamarca
9	29 de octubre/10	EPC de Gacheta, Cundinamarca
10	18 de febrero/11	EPC de Facatativá, Cundinamarca

VISITAS PRACTICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS CALI Y VALLE DEL CAUCA		
Nº	Fecha	EPC
1	9 al 13 ago/10	EPC Villa Hermosa y CPCAMS de Jamundí, Valle del
2	24 de sep/10	EPC de Buenaventura, Valle del Cauca



3	12a1 15 oct/10	EPC de Caicedonia, <u>Cartago y Sevilla</u> , Valle del Cauca
4	19a122 oct/10	EPC de Buga, Palmira y Tuluá, Valle del Cauca

VISITAS PRACTICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE SANTANDER		
N°	Fecha	EPC
1	4 al 7 oct/10	EPC "La Modelo" Bucaramanga, Santander
2	5 de octubre/10	EPC de Giron, Santander
3	6 de octubre/10	EPC de San Gil, Santander
	22 al 25 mar/11	EPC del Socorro y Vélez, Santander

Las visitas programadas a los diferentes centros de reclusión del país, para adelantar la verificación y seguimiento a la aplicación de la política de resocialización, fueron realizadas en su totalidad, llegando a los establecimientos, haciendo la presentación respetiva e informando a los directores, el motivo por el cual estábamos ahí. Estos a su vez comunicaban quién era el encargado del área de resocialización, que en la mayoría de los reclusorios, estaba a cargo de un Dragoneante.

En el desarrollo de las visitas, se encontró que se carece de profesionales idóneos (psicólogos, terapeutas, abogados, contadores, trabajadoras sociales, instructor de talleres y educador de planta) para el desarrollo de los programas educativos y de trabajo acorde con las necesidades de la población y con la infraestructura de los establecimientos. Al respecto, es de notar que todas las funciones son ejercidas por el personal de custodia y vigilancia, el cual está nombrado y capacitado para cumplir funciones diferentes, generando vulnerabilidad en materia de seguridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Del mismo modo, cabe resaltar que los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se mostraron de acuerdo con que la política pública de reinserción social debería ser autosuficiente y autogeneradora, aceptando que se debería fortalecer el trabajo, la producción y la generación económica.

Posteriormente, con acompañamiento del señor Director y el Coordinador de Reinserción Social del centro reclusorio, se hacía un recorrido por todo el establecimiento, solicitando primero el parte diario de los internos.

Se visitaron las siguientes áreas: área de rancho, de sanidad, talleres, celdas, las garitas, los espacios para descansar; se revisaron las baterías sanitarias (baños, duchas, lavamanos, orinales), y se logró hablar con los internos, ocasión que se aprovechó para preguntarles sobre las actividades culturales, recreativas y deportivas, así como por los programas dirigidos a mantener la unidad de la familia, tras lo cual, manifestaron (en la mayoría de los sitios visitados), que con el desarrollo de estas actividades, se les daba oportunidad para recreación.

Terminado el recorrido, nos concentramos en el tema de mayor interés: las áreas de resocialización, es decir, las aulas educativas, los programas de educación formal e informal, la capacitación laboral y los talleres productivos al interior de los establecimientos carcelarios.

El resultado de lo anterior es que en la mayoría de los casos la infraestructura es antigua y obsoleta, hay poca ventilación en las aulas, se encuentra mucha humedad





en las paredes, existe filtración de agua, los espacios son pequeños y los espacios en general se encuentran sucios. Como caso particular en uno de los establecimientos visitados, se evidenció que los internos reciben clases en la capilla.

Al respecto, los reclusos manifestaron que esa situación, no sólo afecta la planta física, sino la salud de los presos, convirtiéndose además en un obstáculo para el desarrollo del tratamiento penitenciario, enfocado hacia la resocialización o reinserción social; adicionalmente, solicitaron que el INPEC debería asignar los recursos necesarios para los arreglos locativos, con el fin de desarrollar los programas de tratamiento penitenciario de manera efectiva.

Con la finalidad de obtener información de los directamente involucrados con la situación, se promovieron activamente reuniones con los internos designados como representantes de cada patio que hacen parte del Comité de Derechos Humanos, quienes de manera libre, expresaron sus inquietudes y sugerencias sobre el tema de resocialización o reinserción social.

Señalaron que los cambios de administración frustran los pocos procesos iniciados; que el personal o funcionarios no deberían ser movidos para mantener la continuidad de dichos procesos, y que el hacinamiento o superpoblación limita las oportunidades. Sin embargo, reconocen que ha mejorado la convivencia al tiempo que manifiestan su deseo de que se amplíen los espacios para facilitar la reinserción social, que el INPEC cree más cupos para que los sindicatos tengan oportunidad de trabajo; que se dicten cursos sobre resolución de conflictos; que se ofrezcan charlas de crecimiento personal a los internos cuyo objetivo sea la enseñanza de valores; que se implementen cursos de alfabetización dentro de los patios; que se solucione la ausencia de programas para el pos penado, incluyendo la reubicación laboral y evitando así la reincidencia y la estigmatización social; asimismo registraron que no se cuenta con personal de dedicación específica y no hay profesionales idóneos.

De otra parte, se estableció que existen serias dificultades para el mantenimiento de la cobertura de los programas educativos, tales como:

- **Remisiones.** Debido a los altos índices de hacinamiento que registran los Establecimientos, al igual que las constantes solicitudes realizadas por los entes de control dirigidas a subsanar esta problemática, se realizan diferentes traslados a los demás centros de reclusión a nivel nacional, lo que afecta la Sección Educativa por cuanto las convocatorias para los programas de educación formal sólo pueden ser realizadas al inicio de cada semestre; por lo tanto, las vacantes no pueden ser cubiertas con nuevos alumnos, en tanto se estarían incumpliendo los parámetros fijados para poder expedir las respectivas certificaciones de estudio.
- **Deserciones** El alto índice de deserción de estudiantes. Un considerable número de reclusos inicia el proceso y decide no continuar realizando la actividad, aduciendo su deseo de inscribirse en actividades que les permitan obtener alguna remuneración económica o un mayor número de días de redención; otros, no desean seguir con la actividad porque no les gusta el estudio o padecen de alguna enfermedad; y por último, se ausentan de manera recurrente, sin ninguna excusa aparente, lo que genera la necesidad de solicitar la cancelación del permiso. La inasistencia a clase ocasiona retrasos en los temas y la mayoría de quienes presentan estos comportamientos no muestran la intención de ponerse al día en los mismos, generando traumatismos en la ejecución de los programas ya que la Secretaría de Educación exige un mínimo de asistencia y desempeño durante el desarrollo de cada semestre, como requisito para la expedición del respectivo





Terminadas las visitas administrativas a los centros reclusorios, se proyectó informe individual, donde se comentaron los hallazgos, las irregularidades encontradas y al final del informe, se realizaron unas recomendaciones, remitiendo copia de éstas a las autoridades gubernamentales, con el fin de que se tomaran las medidas pertinentes.

De acuerdo con lo anterior, y con las recomendaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación a las autoridades, se recibieron respuestas así:

- La Subdirectora de Reinserción Social del INPEC, informó que uno de los obstáculos para el desarrollo del tratamiento penitenciario enfocado hacia la resocialización o reinserción social, ha sido la carencia de recursos para su ejecución, así como la existencia de Establecimientos poco adecuados.

Respecto a las debilidades institucionales del INPEC, afirmó que ellos son concientes del déficit de personal idóneo en los establecimientos, de las deficiencias en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas y proyectos para los desarrollos educativos y de trabajo, pero asimismo aclaró que para la provisión de cargos en el INPEC, se está pendiente de los nombramientos en los centros de reclusión que se hacen necesarios.

Del mismo modo, a manera de ejemplo, enfatizó sobre el caso específico del EPC de Fusagasugá, en donde para suplir la deficiencia de personal para el desarrollo de los programas de Educación y Trabajo, se cuenta con el apoyo de la Universidad de Cundinamarca, Convenio con el Colegio Santo Domingo de Fusagasugá y con la Red Social.

Asimismo, se señaló que la Ley 65 de 1993 y la Resolución 2392 de mayo de 2006 establecen que los internos pueden ser nombrados de acuerdo a sus perfiles e idoneidad como instructores educativos y laborales, previa aprobación de la Junta de Trabajo y Estudio, y así apoyar los procesos que adelante el EPC en alfabetización, educación básica, media, programas de formación laboral y proyectos productivos entre otros.

- De otro lado, el Coordinador del Grupo Obras Civiles del INPEC comunicó que las necesidades de los 144 establecimientos que requieren inversión fueron incluidas en el plan de necesidades para ser estudiado y remitido.

### Conclusiones

- Al terminar la visita de inspección a los centros de reclusión, se elaboró un informe individual con sus respectivas recomendaciones, remitiendo copia de las mismas a las autoridades gubernamentales para que se promoviera y facilitara la reinserción social de los internos consagrada en la Constitución Política, en la Ley 65 de 1993, en el Código Penitenciario Carcelario, en el Código Penal, así como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia.
- Son muchas las debilidades estructurales, espacios no adecuados para dictar los programas (talleres, aulas, espacios de trabajos), deficiencia de personal adecuado, recurso humano y movilidad de las personas encargadas de la ejecución de los planes y programas de reinserción social, situaciones que concurren para que no se trabaje en el verdadero tratamiento resocializador. De esta manera, se



crea un impacto negativo en la población en general, ya que las personas que salen de un centro de reclusión, al cumplir la pena sin el debido tratamiento penitenciario, pueden llegar a reincidir, generando un grave perjuicio a la comunidad.

- El INPEC no tiene una política pública debidamente diseñada e implementada que permita cumplir con el deber de resocialización que le corresponde al Estado respecto de la población reclusa; si bien es cierto, existe para cada establecimiento un programa denominado "plan ocupacional", ello en la práctica no es una realidad; de una parte porque no cubren a la totalidad de las personas privadas de la libertad y de otra porque corresponden en su mayoría al desarrollo de algunas actividades, tales como artesanías, bisutería, lecturas, aseo, etc. que los internos realizan en el patio, sin control y dirección de instructores, sin embargo les son certificadas como trabajo para la redención de pena.
- En cuanto a actividades de estudio el interno ingresa a ellas de manera voluntaria, siempre y cuando exista el cupo, y de la misma manera se retira con las consecuencias que ello le puede acarrear, como son las de no contar con certificación para su redención o la de espera hasta un nuevo ciclo para su nuevo ingreso.
- Los centros de reclusión visitados no cuentan con el número de profesionales idóneos para trabajar en el área de Reinserción Social, tales como trabajadores sociales, psicólogas, contadores, terapeutas, abogados, instructores, jefes de talleres y educadores de planta. Es así como esta área se deja bajo la responsabilidad de un Dragoneante de la guardia, perteneciente al personal de custodia y vigilancia del INPEC, impidiendo así el manejo adecuado de los programas, y vulnerando la seguridad en los establecimientos carcelarios.
- Dada la relevancia que tiene el proceso de resocialización y reinserción del individuo a la sociedad, llama la atención la poca inversión en programas educativos y capacitación laboral, dificultando la continuidad de los procesos.
- El Estado no tiene una política criminal efectiva que desarrolle en la asistencia post penitenciaria, que contribuiría con la reinserción social del recluso y evitaría, sin lugar a dudas, la reincidencia en el delito.
- Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), la reinserción social solo se logrará a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia.
- Es lamentablemente común ingresar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios y observar en los patios, el alto número de personas privadas de la libertad en completo ocio y desocupación, lo que indica que los programas de resocialización no son una realidad, lo que conlleva que puedan incurrir en la prisión en un nuevo delito o que una vez en libertad se conviertan en reincidentes.

### Recomendaciones

- El tratamiento debe partir del estudio científico de la personalidad del interno, el cual debe ser progresivo, programado e individualizado.
- El Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC deben gestionar, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos necesarios para la construcción y



mejora de las instalaciones educativas, de los talleres y de las actividades deportivas de los centros de reclusión, así como para el nombramiento de personal idóneo que cumpla la misión de Reinserción Social en cada establecimiento.

- El INPEC, a través del Consejo de Evaluación y Tratamiento debe hacer un diagnóstico, una evaluación y clasificación de la población condenada, porque el mismo no se ha implementado adecuadamente.
- El INPEC debe fortalecer la Oficina del Área de Reinserción Social, nombrando profesionales idóneos, como psicólogos, terapeutas, abogados, contadores, trabajadoras sociales, instructores de talleres y educadores de planta, para que apoyen el desarrollo de los programas educativos y de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la población y la infraestructura de los EPC.
- El INPEC debe mejorar los espacios deportivos en los pabellones o patios, para que los internos puedan llevar a cabo la práctica de las diferentes actividades.
- El INPEC debe adecuar las instalaciones en donde los reclusos reciben la capacitación, ya que en la actualidad presentan deterioro por filtraciones de agua, afectando su salud y la de las personas que allí laboran.
- El INPEC debe dar mayor oportunidad de trabajo a los sindicatos, es decir, debe crear cupos para que ellos puedan redimir la pena.
- Como complemento de los programas de resocialización los reclusos condenados deberían, salvo casos excepcionales, cumplir la condena en Establecimientos ubicados en sitios cercanos a su núcleo familiar.
- De igual manera para que el Estado cumpla con el deber de resocialización de las personas privadas de la libertad, el INPEC y las demás entidades concernidas deben diseñar e implementar una política pública acorde con las condiciones que actualmente presenta el sistema penitenciario y carcelario, tendientes a que la resocialización sea una realidad, y sea una obligación que cobije a toda la población reclusa en todo tiempo.



MARIO GONZÁLEZ VARGAS  
Procurador Delegado





000001

ANEXO No. 02 DIRECTIVA PERMANENTE No. DEL - 1 FEB. 2012  
CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACIÓN



**DIRECTIVA NÚMERO**

( 017 )

**DE:** Procurador General de la Nación

**PARA:** Director General del INPEC, Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC, Directores, Subdirectores, Comandantes de Guardia y Vigilancia de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del INPEC y Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de las Fuerzas Militares y de la Policía.

**ASUNTO:** Directrices para la protección de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Bogotá, D.C. 15 DIC 2011

**EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS  
ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y CONSIDERANDO**

Que el artículo 7 del Decreto 262 de 2000, numerales 2, 7 y 36, le confieren facultades al Procurador General de la Nación para: i) formular políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de vigilancia superior con fines preventivos y promoción, protección y defensa de los derechos humanos; ii) expedir actos administrativos, órdenes, directivas y circulares necesarias para desarrollar las funciones atribuidas por la ley; iii) expedir las directivas y \_circulares que resulten conducentes para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos.



Que los artículos 24 y 26 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con la Resolución 017 de 2000, establecen como función de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos: i) velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de las decisiones judiciales y administrativas; ii) intervenir ante las autoridades públicas para defender el orden jurídico, las garantías y los derechos fundamentales, el cumplimiento de las normas del orden nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Que la Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1998 declaró que el estado de cosas que se presenta en las prisiones colombianas, conforme lo describe en la sentencia, es inconstitucional y exigió de las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, con el fin de remediar esta situación.

Que la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998, numeral tercero, ordenó al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Departamento Nacional de Planeación, elaborar en un término de tres meses a partir de la notificación de la sentencia, un plan de construcción y reparación carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. En el mismo numeral ordenó a lo Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación ejercer supervigilancia sobre este punto.

Que la Corte Constitucional en auto 041 del 4 de marzo de 2011, en incidente de desacato de la sentencia T-153 de 1998, ordenó en el numeral tercero dar traslado de los escritos presentados por los solicitantes al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y a la Contralora General de la República con el fin de verificar las denuncias allí contenidas y adoptar las medidas correspondientes.

Que la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos verificó que las personas privadas de la libertad no reciben de manera satisfactoria los servicios de salud y que la política de resocialización no es suficiente para cubrir la totalidad de personas detenidas, en desmedro de la resocialización y de la calidad de vida digna de la población reclusa.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10, establece que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a su condición de ser humano. Deber que es reiterado por los principios básicos para el tratamiento a los reclusos, principio 1, al establecerse que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes a seres humanos. Y que del mismo modo, la Convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 5, numeral 2, consagra que toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Que es deber del Estado proveer condiciones dignas de vida, espacio vital, instalaciones de aseo e higiene, agua potable, alimentos y bebidas, ejercicio físico, libertad de culto, derecho a la atención médica, ecuanimidad de los procedimientos disciplinarios, actividades de reinserción social, capacitación laboral, actividades educativas y culturales; contacto con el mundo exterior que comprende acceso a material de lectura, radio y televisión, el derecho a la vida familiar y proximidad al hogar; y en general, todo ello consagrado tanto en normas internacionales ratificadas por el Estado como en otras de carácter nacional.



Que la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, artículo 5 señala que en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Así como que se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

Que las personas privadas de la libertad conservan sus derechos fundamentales como seres humanos, con la excepción de los que hayan perdido como consecuencia específica de su condición de encierro.

Que es deber constitucional y legal de todas las autoridades que en el ejercicio de sus funciones les corresponda la seguridad, atención y vigilancia de la población reclusa, acatar, respetar y cumplir con todas las normas tanto de orden interno como internacional en el trato para con las personas privadas de la libertad.

Que con base en dichas disposiciones el Procurador General de la Nación, como supremo director del Ministerio Público, defensor de los intereses de la sociedad, especialmente de la población vulnerable y con el fin de garantizar la protección permanente de la población reclusa:

### DISPONE

**Primero:** instar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para que se atiendan y acaten todas las recomendaciones realizadas en el documento "Acción Preventiva de "Seguimiento a la Política Pública de Prestación del Servicio de Salud en los Centros Penitenciarios y Carcelarios" incluyendo no sólo las de medicina general sino también las de odontología, las de terapias y las de exámenes de diagnóstico, así como a las que hubiere lugar en relación con el tamaño del Establecimiento y el número de reclusos en los mismos.

**Segundo:** Exhortar a las autoridades penitenciarias para que se disponga lo necesario a fin de que se construya en cada uno de los Establecimientos en donde no existan, áreas de sanidad adecuadas, a los parámetros técnicos y estándares internacionales vigentes, para la atención médica del personal recluso.

**Tercero:** Exhortar a las autoridades penitenciarias para que en cada uno de los Establecimientos se dote debidamente a las mencionadas áreas de sanidad del instrumental suficiente y asimismo, de los equipos necesarios para el desempeño eficaz del personal profesional de la salud en la atención a las personas privadas de la libertad.

**Cuarto:** Exhortar a las autoridades penitenciarias para que de existir las referidas áreas, éstas sean debidamente remodeladas, adecuadas y habilitadas para las funciones requeridas con el fin de conseguir así la aprobación de las Secretarías de Salud respectivas para su funcionamiento.

**Quinto:** Instar al INPEC para que exija de CAPRECOM la, asignación del personal profesional especializado en la atención en salud de forma permanente y proporcional al número de internos de cada Establecimiento, enfatizando en urgencias tanto médicas como odontológicas y de otras especialidades tales como las relativas al personal femenino en los centros de reclusión de mujeres.



**Sexto:** Instar al INPEC para que exija que CAPRECOM cumpla a cabalidad con los términos del contrato suscrito.

**Séptimo:** Instar al INPEC para que realice una auditoría permanente incluyendo lo relativo al cumplimiento en el pago a proveedores y a la entrega de los medicamentos formulados a los internos

**Octavo:** Instar al INPEC para que diseñe e implemente un protocolo general de traslados de internos para la atención médica, en el cual se incluya la programación y asignación de personal y vehículos, esto con el fin de evitar que se sigan presentando retardos injustificados y pérdida de las citas médicas de los reclusos, que en la inmensa mayoría de los casos no son trasladados a sus citas o los llevan fuera del tiempo.

**Noveno:** Instar al INPEC para que diseñe e implemente los correspondientes programas de prevención en cada uno de los Establecimientos con el fin de reducir los elevados índices de morbilidad.

**Décimo:** Instar al INPEC para que realice auditorías permanentes tanto a los alimentos como a las empresas que suministran la alimentación a los reclusos en los diferentes Establecimientos a su cargo, con el fin de garantizar su calidad, cantidad y las debidas condiciones de aseo e higiene de los mismos.

**Undécimo:** Instar a la Dirección General del INPEC y a los Directores de todos los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios para que atiendan y acaten todas las recomendaciones realizadas en el documento Acción Preventiva de "Seguimiento a la Política Pública de Resocialización en los Centros Penitenciarios y Carcelarios".

**Décimo Segundo:** Instar a la Dirección General del INPEC para que un término no mayor de tres meses diseñe los planes y programas de trabajo y estudio acordes a una verdadera política pública de resocialización que permita dar cubrimiento a la totalidad de las personas privadas de la libertad.

**Décimo Tercero:** Instar al INPEC para que en cumplimiento del Convenio 29 de la OIT garantice una verdadera resocialización generando fuentes de trabajo industriales, agropecuarias y artesanales en todos los centros de reclusión a fin de que cada persona privada de la libertad una vez ingrese a un establecimiento, tenga derecho a acceder a un cupo de trabajo que le permita percibir ingresos, redimir pena y resocializarse, a excepción de quienes legalmente no están obligados a laborar.

**Décimo Cuarto:** Instar al INPEC para que de igual manera, como base fundamental de la resocialización, genere cupos de estudio y capacitación permanente que permita el cubrimiento para todas las personas privadas de la libertad, de acuerdo a los niveles de estudio y conocimiento de la población reclusa en cada establecimiento.

**Décimo Quinto:** Instar al INPEC para que cumpla con el deber que le compete en la resocialización de las personas privadas de la libertad adelantando las gestiones para vincular a tales programas a la empresa privada y el apoyo de entidades públicas.





**Décimo Sexto:** Instar al INPEC para que incluya en el reglamento que toda persona privada de la libertad una vez ingrese a un establecimiento de detención tendrá inmediatamente derecho a acceder a un cupo de trabajo y estudio, sin que ello implique para el recluso el agotamiento previo de trámites y exigencias no establecidas en las leyes.

**Décimo Séptimo:** Instar al INPEC para que garantice en todos los establecimientos de reclusión las actividades permanentes de recreación, deporte y cultura para todas las personas privadas de la libertad.

**Décimo Octavo:** Instar al INPEC para que cumpla a cabalidad con los programas de reinserción y para que las actividades de trabajo, estudio, deporte, recreación y culturales, etc. sean una realidad que cubra de manera permanente a toda la población privada de la libertad. Asimismo, deberá fortalecer las oficinas de Reinserción Social en todos los establecimientos penitenciarios, con profesionales idóneos, en psicología, trabajo social, terapeutas, abogados, economistas o administradores de empresas, instructores de talleres, educadores, etc. para que apoyen y desarrollen los programas de trabajo, educación, capacitación, deportivos y demás actividades.

**Décimo Noveno:** Instar al INPEC, en aras de cumplir con la función de resocialización, para que gestione ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades concernidas los recursos necesarios para implementar y desarrollar la política pública de resocialización; para ello le corresponde la construcción y mejora de las áreas de trabajo, de talleres, de espacios educativos y deportivos.

**Vigésimo:** Instar al INPEC para que actualice sus reglamentos y protocolos, acogiendo en ellos las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las personas privadas de la libertad, como también las decisiones de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, en cuanto a calidad de vida de la población reclusa, especialmente respecto a la unidad familiar, la prevalencia de los derechos de los hijos menores de edad; para ello se insta al INPEC para que a las personas condenadas se les asigne a establecimientos penitenciarios ubicados dentro de la jurisdicción de su núcleo familiar.

**Vigésimo Primero:** Instar a la Dirección General del INPEC y a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de las Fuerzas Militares y de Policía para que atiendan y acaten todas las recomendaciones realizadas en el documento Acción Preventiva de "Seguimiento a la Política Pública en los Establecimientos de Reclusión de las Fuerzas Militares".

**Vigésimo Segundo:** Instar al INPEC, como directo responsable del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, a fin de que en todo establecimiento penitenciario y carcelario impere la disciplina, se cumplan las normas penitenciarias y se respeten los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, debiendo ejercer rigurosa vigilancia sobre los Establecimientos de Reclusión de las Fuerzas Militares.

**Vigésimo Tercero:** Instar a la Dirección General del INPEC para que implemente programas permanentes de capacitación y actualización en normas de derechos humanos, principios básicos para el tratamiento a los reclusos, derechos de las personas privadas de la libertad y demás normas relacionadas, dirigidos a todos los servidores del INPEC y especialmente a cuerpo de custodia y vigilancia a fin de prevenir conductas que constituyan violación de los derechos fundamentales de la población reclusa y actos de corrupción.





**Vigésimo Cuarto:** La Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos hará el seguimiento al cumplimiento de la presente Directiva.

Comuníquese y Cúmplase



ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO  
Procurador General de la Nación

